

PALABRAS CLAVE

Capital social
Sociedad civil
Crecimiento económico
Estudios de casos
Movimientos sociales
Aspectos culturales
Pueblos indígenas
Grupos sociales
Colombia

Colombia: capital social, movilización social y sostenibilidad del desarrollo en el Cauca

Raúl Cortés Landázury y Mónica María Sinisterra Rodríguez

En las modernas teorías del desarrollo ha sido recurrente decir que las redes asociativas que construye la sociedad civil influyen en las trayectorias de progreso económico de los países, corrigiendo aspectos como las imperfecciones de mercado y la ingobernabilidad democrática derivada del desenvolvimiento de las políticas públicas. En el caso de una región como el departamento del Cauca, ubicado al suroeste de Colombia, la riqueza en materia de movilización social y acciones colectivas no ha estado acompañada de buenos resultados económicos, en comparación con lo alcanzado en otras zonas del país con igual o menor ritmo de congregación. En el presente trabajo se intenta especificar las categorías involucradas en este fenómeno, según las particularidades culturales de la región, que la constituyen en un estudio de caso clave para entender el efecto de los procesos sociales movilizatorios en el desarrollo latinoamericano.

Raúl Cortés Landázury
Profesor Asistente del Departamento
de Ciencias Económicas, Facultad
de Ciencias Contables, Económicas y
Administrativas, Universidad del Cauca.

✦ rcortés@unicauca.edu.co

Mónica María Sinisterra Rodríguez
Profesora Asociada del Departamento
de Ciencias Económicas, Facultad
de Ciencias Contables, Económicas y
Administrativas, Universidad del Cauca.

✦ msinisterra@unicauca.edu.co

I

Introducción

Durante los últimos 15 años, el mundo en desarrollo y América Latina en particular han experimentado una amplia gama de estilos de políticas y reformas en pro de la aceleración del crecimiento económico, la reducción de la pobreza y el mantenimiento de la gobernabilidad democrática. Para alcanzar estos objetivos, la mayoría de los países adoptaron, casi al unísono, las políticas enmarcadas en el llamado “Consenso de Washington” cuyas recomendaciones apuntaron a tópicos como la defensa de los derechos de propiedad, la estabilidad macroeconómica, el impulso al libre mercado y la integración comercial (Hausmann, Rodrik y Velasco, 2006). No obstante, los resultados no fueron del todo halagüeños, como tampoco lo fueron durante la vigencia del modelo estatista de crecimiento hacia adentro. Por lo menos, no tanto como para alcanzar el sitio de las sociedades europeas y norteamericanas.

Si bien en muchos casos el paquete de medidas respondía a orientaciones de igual inspiración, el alcance y la calidad de las políticas públicas no fueron uniformes. De allí que en gran parte de la investigación en este campo surja la pregunta: ¿por qué mientras algunos países o regiones pueden adaptar rápidamente sus políticas a los cambios de las circunstancias externas, o innovar cuando las políticas no dan resultados, otros reaccionan lentamente y con grandes dificultades, o mantienen medidas inadecuadas durante largos períodos de tiempo?

En todo caso, los resultados de la década de 1990 dejaron en claro que la complejidad del desarrollo implica una nueva postura frente a elementos clave como el crecimiento económico, que reivindica los nexos con la estabilidad política y la solidez institucional, a las que da en gran parte sentido la existencia de una sociedad civil activa y deliberante en defensa de lo público. Justamente, en esta dirección, entidades multilaterales han visto en el desenvolvimiento de las instituciones importantes implicancias para los países del sur. Debido a ello, desde mediados del decenio de 1990, organizaciones como

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Alonso, 2007) han adoptado el enfoque de la buena gobernanza (*good governance*) como estrategia en que se enfatiza la importancia de los procesos de participación política, el protagonismo de las organizaciones de la sociedad civil capaces de hacerse escuchar y el papel del Estado en la promoción del desarrollo humano y no solo económico (DNP, 1995).

Sin embargo, en la investigación acerca de los elementos condicionantes de la buena gobernanza, es decir, del fenómeno a través del cual se generan relaciones simbióticas entre el Estado, la sociedad y el mercado, ha cobrado fuerza el concepto de “capital social” como catalizador de los esfuerzos públicos y privados en la promoción del bienestar, lo que para muchos ha significado la revelación de actitudes de colaboración colectiva, a partir de las cuales se genera la confianza necesaria para dinamizar las transacciones económicas y asegurar la vigencia del orden institucional (Fukuyama, 2004). Pero a pesar de la fertilidad del concepto y de su virtual variedad aplicativa, no hay consenso todavía ni sobre su significado teórico ni sobre su trascendencia metodológica. No obstante, tener acuerdos mínimos sobre el particular es indispensable para dar sentido a la investigación económica y examinar algunos de los elementos que explican las fuentes de la distorsión endémica en los mercados e impiden el óptimo uso de recursos para el logro del bienestar, desencadenando diferencias regionales importantes como las que se observan en el desarrollo del departamento del Cauca.

Esta región, al suroeste de Colombia, es uno de los departamentos más pobres del país. Para el año 2000, el Cauca solo superaba al departamento del Chocó entre 24 departamentos, el 77,2% de su población se hallaba en la línea de pobreza y el 39,7% en la línea de indigencia. Condiciones que se mantuvieron para el año 2005, cuando según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el 33,6% de la población estaba en la línea de indigencia y el 46,4% de los hogares del departamento tenían necesidades básicas insatisfechas, en comparación con un promedio nacional de 27,6%. La provisión de servicios públicos del Cauca (agua potable y alcantarillado) está muy por debajo del promedio nacional (56,3% comparado con un 65,3% nacional). Se experimenta, además, un permanente conflicto armado

□ El presente artículo forma parte de los resultados de la investigación “Determinación del capital social, las redes de asociatividad y la sustentabilidad del crecimiento en el departamento del Cauca en el período 2006-2007”, avalada por la Vicerrectoría de Investigaciones y el Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad del Cauca.

y se registra violencia a lo largo y ancho de la región, promovida principalmente por grupos armados al margen de la ley que aprovechan las dificultades de acceso y la intrincada geografía departamental.

Cerca del 21% de la población del Cauca es indígena, de la cual el 84,5% vive en áreas de resguardo; existen 84 resguardos que comprenden una superficie de 519.850 hectáreas, equivalentes al 17,7% del total departamental (DNP, 2007). Los resguardos eran instituciones de origen español creadas para proteger a los indígenas, que se regían por una autoridad política autónoma llamada cabildo. En los resguardos la tierra es de propiedad comunitaria de la parcialidad que la habita, respaldada en títulos de propiedad formales. Esta estructura de tenencia de la tierra junto con el mantenimiento de las lenguas nativas, sus tradiciones culturales y la protección del territorio comunal, limitan los intercambios impersonales, los intercambios de derechos de propiedad, la posibilidad de aumentar el tamaño del mercado y, finalmente, mantiene la vieja estructura institucional de gobierno y las formas de hacer política, generando un efecto de cierre de grupo o “enraizamiento” en el sentido de Granovetter (1985) que impide la dinámica productiva.¹

En el devenir histórico del departamento del Cauca el mantenimiento de la explotación económica extractiva se relaciona con el impedimento de avanzar hacia una vida republicana y disfrutar de nuevas instituciones políticas, elemento que se constituyó en la principal causa formal del rezago económico del Cauca, cuyo origen data de la época colonial. La estructura administrativo-política del Cauca fue claramente instalada por la relación colonial que vinculaba a los nuevos territorios conquistados con la Corona española. Estas relaciones de dependencia promovieron el despojo a los pueblos colonizados de la capacidad de decidir sobre sus vidas, su territorio, sus creencias y su cultura. La Corona española generó estructuras jerárquicas de gobierno que buscaron proteger sus intereses y formaron redes clientelares circunscritas a los ámbitos geográficos de su influencia, relacionadas con el control y dominio de la fuerza de trabajo (esclavos) y de la tierra.

“El Cauca introdujo una forma particular de ejercicio de poder del Estado de corte aristocrático, religioso y racista que dentro de la memoria histórica produjo características particulares en el ejercicio de la dominación.

Es de recordar que su capital, Popayán, tuvo varias de las familias más representativas en la compra y venta de esclavos en Colombia hasta finalizar el siglo XIX, que se ejercía principalmente sobre los negros. Fue allí donde también se tipificó el más reconcentrado racismo frente a esta etnia y la de los indígenas, cuyas secuelas aún hoy dejan sus rastros” (Jaramillo, 2007, p. 4). Pero la herencia colonial no dejó afuera a las instituciones indígenas, el grupo que quizás ha resistido con mayor vehemencia la exclusión y la concentración del poder en manos de los legatarios de los antiguos encomenderos. Paradójicamente, la estructura institucional indígena actual se sustenta en el resguardo y el cabildo, conceptos introducidos por los españoles durante la Colonia, pero resignificados y apropiados por los pueblos indígenas (Caviedes, 2001) al ver la oportunidad de generar en ellos una autoridad política que les reconociera y validara sus particularidades étnicas.

Los episodios de apropiación o captura de rentas (*rent-seeking*) durante la Colonia no solo evidencian la escasa efectividad de la maquinaria de gobierno y del marco legal para crear un ambiente cuya premisa fuera la clara especificación de los derechos de propiedad (sobre recursos como la mano de obra y la tierra), sino que además marcaron una tradición bajo la cual la ley era utilizada a conveniencia como ejercicio de poder excluyente, y no como regla que facilitara los intercambios. De manera evidente, esta problemática ha sido una constante en el desenvolvimiento de América Latina, y así lo han expuesto Naritomi, Soares y Assunção (2007) para el caso brasileño, y De Soto (2001) para el caso peruano. Es por eso que exponer el caso colombiano, a partir de las dinámicas producidas en el departamento del Cauca, no solo reafirma la necesidad de fortalecer las instituciones económicas y políticas, sino que cuestiona la efectividad de las movilizaciones sociales para formar capital social capaz de proveer bienes públicos y generar desarrollo.

Virtualmente, una sociedad civil fuerte, como la que aparece en algunos episodios de la historia regional caucana, caracterizada por movimientos sociales promovidos por grupos indígenas, permitiría alcanzar al mismo tiempo eficiencia, crecimiento y legitimidad, además de desterrar la encrucijada valorativa del Estado moderno (capitalismo tardío) que se debate entre promocionar la eficiencia, favoreciendo la actividad privada, y alcanzar la legitimidad con estrategias de bienestar que coartan la “mano invisible”.

El problema hasta ahora es que, a pesar de fenómenos de cohesión social como el que ha ostentado la movilización aborígen, el grado de articulación de las

¹ Formas de hacer política claramente reflejadas en las acciones del partido político Alianza Social Indígena que llegara al Congreso de la República de Colombia después de instaurada la nueva Constitución.

elites políticas en el centro de las decisiones nacionales (Bogotá, D.C.) y la presencia de algunas ventajas comparativas vinculadas a la disponibilidad de recursos naturales, el Cauca no reporta niveles de privilegio en el contexto del desarrollo regional y nacional, ni ha mejorado las condiciones de vida de sus habitantes. Algo parece estar pasando con las redes de cooperación de la sociedad civil, que hace pensar en la existencia de un andamiaje colectivo que se debate entre fuerzas capaces de generar sinergias en la formulación e implementación de políticas de desarrollo y otras con características retardatarias y paquidérmicas.

II

El capital social en la trama del desarrollo: una introspección teórica

El capital social tiene la capacidad efectiva de movilizar productivamente los recursos asociativos que radican en las distintas redes sociales a que tienen acceso los miembros de un grupo, pero entraña la complejidad de articular el interés individual con el colectivo. En los primeros análisis sobre capital social, que constituyen hoy día los clásicos de este tema, se hacía referencia a la importancia de las relaciones personales al examinar los sistemas económicos. A saber, el tratamiento que haría Coleman (1990) desde una perspectiva estructuralista, Bourdieu (1980) desde una perspectiva culturalista y Granovetter (1985) desde una perspectiva institucionalista. No obstante, es con Putnam, Leonardi y Nanetti (1993) que se reconoce una relación válida entre capital social y desarrollo económico, y su capacidad para promover cambios en las condiciones de bienestar a partir de *Making Democracy Work*; posteriormente, a través de organismos multilaterales como el Banco Mundial se le reconocería como instrumento primordial de las políticas de desarrollo.

El capital social puede ser entendido como las características de la vida social —redes sociales, normas y confianza— que permiten a los participantes actuar asociados de una forma más efectiva para conseguir objetivos compartidos (Putnam, Leonardi y Nanetti, 1993, p. 167). Este conjunto de características permite ampliar la gama de oportunidades con que pueden contar las personas de una comunidad y, por tanto, aumentar los beneficios de una participación asociativa. Más aún, sobre la base de su estudio en Italia, se lograba demostrar que el capital social era capaz de transformarse y

En tal sentido, a continuación se pretende establecer, primero, una discusión teórica y metodológica sobre la funcionalidad del capital social como elemento para entender la dinámica del desarrollo regional; segundo, un análisis de caso de la historia de las movilizaciones en el departamento del Cauca en que se explican las fortalezas o debilidades asociativas; tercero, una relación entre la estructura social derivada de la Colonia y las condiciones actuales de desarrollo de los municipios del departamento; y, por último, un panorama general del desenvolvimiento de las organizaciones de la sociedad civil a mediados de la década de 2000.

variar en el tiempo, lo que a todas luces significaba la posibilidad de cambiar los niveles de desarrollo de una región si se lograba modificar en forma exógena el capital social existente.

No obstante, la propagación de trabajos sobre el tema y la consecuente complejidad de moldear conceptual y metodológicamente este recurso intangible conforme cambian los contextos ha conducido a plantear las diversas formas que adquiere el capital social, que van desde el individual —referido a contratos diádicos, es decir, entre dos (con redes egocentradas)— hasta el capital social grupal, en que se considera la existencia de un trabajo estable en equipo bajo la presencia de un líder que convoca y es reconocido por sus pares. A nosotros nos interesa el tipo de capital social externo, caracterizado por la construcción de relaciones de trabajo comunitarias en forma de “partenariado” entre los actores estatales y no estatales de una región, así como entre regiones, que desemboca en la articulación de diferentes recursos para mejorar la eficiencia adaptativa de la estructura económica y concertar mecanismos de coordinación social.

De esta manera, el papel de las redes se convierte en precursor básico de la gobernabilidad y la estabilidad económica.² ¿Pero cómo estimar un activo a todas luces

² Gabriel Almond y Sydney Verba (1992) desarrollaron una muy detallada clasificación en los pasos que implican el ascenso al desarrollo político y su correlación con el desarrollo económico, señalando como último peldaño de la modernización la presencia de una ciudadanía participativa y propositiva, acorde con la cultura cívica.

intangibles, donde la información pública es bastante limitada, predominan barreras geográficas de conectividad y ha existido una sistemática agitación política? ¿Tiene sentido incluso abordar este tema en contextos microlocales con preponderancia de la vida rural y bajos grados de capital humano, siendo esta categoría inmanente a las sociedades urbanas del norte? Y luego, ¿para qué hacerlo, si de antemano se infiere una sociedad como la caucana, virtualmente fracturada por el poderío de elites políticas

locales ligadas a la posesión de la tierra, y enfrentadas al liderazgo de grupos emergentes como las comunidades indígenas, los campesinos y afrodescendientes?

Seguramente, el mejor camino para responder a estas interrogantes es hacer algunas distinciones acerca del papel de las acciones colectivas producidas en el Cauca en el pasado reciente en la determinación de capital social, frente al cambio de modelo de desarrollo de finales del siglo XX.

III

Algunas precisiones necesarias a

la luz de la historia de las movilizaciones

En virtud del potencial explicativo del capital social como factor necesario para dinamizar las transacciones económicas y asegurar la vigencia del orden institucional, se ha tendido a asegurar que este existe en aquellos lugares donde la agitación colectiva ha desembocado en la proliferación de movimientos sociales (Ruiz, 2004; Villar, 2003). En efecto, si nos ciñéramos a algunos manuales de ciencia política y economía del desarrollo (Ray, 1998; Valles, 2000; Blomstrom y Hettne, 1990), la actual sociedad caucana se encontraría en un estadio de modernización económica y política en la medida que las características de estas formas de acción colectiva, propias de naciones adelantadas, revelan sucesos como la eclosión de las demandas postmaterialistas, es decir, de aquellos requerimientos de la sociedad —basados en lo simbólico y en las necesidades de estima, reconocimiento y autorrealización— que permiten acceder a un conjunto de bienes (antes imperceptibles) como la identidad étnica, racial o sexual (véase el cuadro 1).

Es más, se podría señalar que la dinámica de los movimientos sociales en el departamento del Cauca desde la segunda mitad del siglo pasado confirma la existencia del activo público. Sin embargo, hipótesis de estas características no concuerdan con aquellas definiciones clásicas de capital social (Coleman, 2001; Putnam, Leonardi y Nanetti, 1993; Bourdieu, 2001; Dasgupta, 2004), que lo ligan a primera vista con el fortalecimiento de redes colectivas conducentes al progreso económico, el respeto institucional y la formación de capital humano.

Pero entonces, ¿cuáles son las características de la acción colectiva de las organizaciones de la sociedad civil en el departamento del Cauca susceptibles de

generar capital social? ¿Hay alguna relación entre la movilización social de la década de 1990 y la generación de capital social?

Uno de los caminos plausibles para penetrar en el asunto es armar una matriz teórica que permita explicar las relaciones entre movilización social y capital social en América Latina, para luego entender la dinámica del departamento.³

Vale la pena entonces comenzar con la definición de “acción colectiva”. En efecto, se trata del fenómeno (Galvis, 2005) que apunta a conservar o modificar la posición y los intereses de cada grupo en el conjunto social. De hecho, es frecuente que tal acción sea concertada entre varios sujetos de un mismo grupo, quienes comparten una misma posición y un mismo proyecto y se organizan de forma relativamente centralizada. Pero la cuestión no para allí, sus móviles son de distinta naturaleza.

Algunos autores (Valles, 2000; Mariñez, 2001) intentan reducir a una clasificación básica las teorías sobre la materia, dividiéndolas en “enfoques racionales”

³ El capital social ha estado presente en la sociología durante décadas: Bourdieu (1980) y Coleman (1990) utilizaron esta denominación ya en la década de 1980, mientras que Granovetter (1985) habló de lazos fuertes y lazos débiles y North (1990) desarrolló su teoría de la institucionalidad con contenidos muy similares a lo que hoy se conoce como capital social. Sin embargo, fue Putnam quien en la década de 1990 lo puso en el centro de la discusión académica al explorar el rol de la sociedad civil en la determinación de los desequilibrios en el desarrollo regional. En América Latina, el término en cuestión se relaciona con ideas vinculadas a formas de desarrollo comunitario o de gestión asociada (*partnership*) (Ruiz, 2004; Villar, 2003; CEPAL, 2007).

CUADRO 1

Evolución de demandas colectivas

Tipo de demanda social	Objetivos generales	Objetivos específicos
Valores materialistas (necesidades físicas)	Seguridad	– Fuerzas armadas potentes – Lucha contra la delincuencia – Mantenimiento del orden
	Subsistencia	– Crecimiento económico – Empleo – Inflación
Valores postmaterialistas (necesidades sociales y autorrealización)	– Satisfacción estética – Conocimiento intelectual	– Calidad urbana y paisaje – Equilibrio ecológico – Libertad de expresión
	– Identidad – Autoestima	– Reconocimiento – Trabajo en comunidad

Fuente: elaboración de los autores de acuerdo con J. Valles, *Ciencia política: una introducción*, Barcelona, Ariel, 2000, y R. Inglehart, *The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics*, Princeton, Princeton University Press, 1977.

y “no racionales”. De esta manera, las primeras se vinculan al desarrollo de la corriente principal de la economía (neoclásica), interpretando los comportamientos humanos como guiados por un raciocinio instrumental que sopesa los beneficios comparados con los costos de emprender una actividad común. Son ejemplos de esta tendencia la teoría de la elección colectiva (*public choice*) de James Buchanan y Gordon Tullock (1993) y la teoría de la movilización de recursos de Mancur Olson (1982). Mientras que en el segundo grupo se encuentran aquellas teorías cuyos móviles de actuación se instalan en lógicas de reflexión mucho más cercanas al terreno político, en tanto consideran aspectos como la socialización en la vida temprana (influencia de la cultura, la familia, y otros) como determinantes de las actuaciones humanas, más que la fría decisión del *homo economicus*. Dentro de este grupo se involucran algunas teorías neoinstitucionalistas y culturalistas.⁴

Deteniéndonos en el análisis de Olson, la acción colectiva es el producto del rol de los grupos y organizaciones que fungen como estructuras construidas para proteger el interés de sus miembros.⁵ Sin embargo, Olson no renuncia a la idea de la existencia de intereses individuales y egoístas en la conformación de las organizaciones, dado que en principio parece ser una

característica innata y ahistórica que no colisiona con la acción colectiva, en tanto que los cálculos racionales persiguen una mejor posición por medio de acciones dentro de un conjunto. En otras palabras, el grupo es un medio común para lograr un fin particular, que no se forma pensando en el sentir del otro. Sin embargo, aunque haya algún grado de coincidencia en la naturaleza de los conglomerados humanos, el autor distingue entre grupos grandes y grupos pequeños. Enfatiza entonces que la persecución de bienes colectivos es una característica solo de las organizaciones o grupos grandes y que el comportamiento del individuo en el interior de estos grupos es análogo al comportamiento bajo competencia perfecta, en la medida que la decisión de participar o no en el grupo tendría un impacto ínfimo para su destino.⁶

Además, en este análisis la conformación de los grupos grandes está condicionada por el paso de sociedades primitivas, con bajo nivel de especialización

⁴ En la sociología funcionalista (Ritzer, 1993) se reconoce la acción colectiva como una respuesta inmediata a la acción del Estado en una suerte de reacción no racional.

⁵ De esto se infiere que de no ser este su objetivo, los intereses individuales serían tutelados por acciones individuales.

⁶ Al tenor de la tradición económica, Olson señala que los incentivos económicos no son los únicos para la organización; existen también incentivos sociales que tienen que ver con el grado de aceptación social y la posición, pero que son bienes individuales y no colectivos. Agrega que los individuos racionales no participan en grupos grandes, a menos que se les coaccione o se les estimule mediante la obtención de algún bien. Sin embargo, reconoce que la efectividad de la acción colectiva puede estar afectada a conductas oportunistas (*free rider*), es decir, la presencia de una persona que pudiéndose beneficiar de la acción de los demás miembros del grupo lo hace sin sufrir los costos de la participación.

En los grupos pequeños la situación es diferente. La parte del bien colectivo que disfruta cada miembro del grupo es significativa y la actuación de uno puede afectar al nivel de provisión de otros.

del trabajo (y poco consenso), a otra moderna donde el trabajo se hace más complejo y la supervivencia del colectivo depende de la capacidad de unir esfuerzos y coordinar movimientos.

Empero, es posible señalar varias críticas a este tipo de enfoque. Quizás la principal, desde el punto de vista de su aplicación al contexto, sea que bajo este enfoque las relaciones sociales y políticas responden a una trama teleológica y evolucionista, que presupone el auge de la dinámica organizativa, estimulada por un alto crecimiento económico. Huelga decir que una conclusión de esta especie recuerda la famosa curva de Kuznetz, en tanto la etapa de despegue económico supone elevados y crecientes niveles de desigualdad y una organización precaria, que disminuyen a medida que las mejoras en las condiciones de vida marcan un nuevo estilo de liderazgo, donde la sociedad civil se organiza para reimpulsar el crecimiento, mejorando la distribución del ingreso en un ambiente de declive del intervencionismo del Estado y de algún grado de superación del trabajo en actividades primarias.

A lo anterior habría que agregar que en esta visión occidentalista los lazos atávicos de la familia extensa impedirían el logro de la “mayoría de edad” en el sentido kantiano, lo que no permite la consolidación de individuos libres e independientes para celebrar contratos que involucren a otros individuos y organizaciones en escenarios simbólicamente distintos a la célula madre. Sin embargo, en escenarios de países pobres, con crecimientos discontinuos, la perspectiva analítica a adoptar parecería ser otra.

Virtualmente, en los enfoques “no racionales” (lógicas políticas) se destierra el cálculo instrumentalista, de manera que las acciones colectivas se orientan por aspectos distintos, entre estos, la búsqueda de la identidad. De manera que lo que podría ser un medio para la perspectiva olsoniana, bajo la óptica de Touraine (1978) resulta ser un fin en sí mismo. En efecto, interesaría más observar contra quién se enfrenta el individuo que se moviliza y cómo se puede diferenciar a partir de esto, que los fines materiales que podría alcanzar.

Touraine (1978) amplía su visión asumiendo tres modelos para recrear la naturaleza de la movilización en América Latina: los conflictos sociales internos, el nacionalismo y la acción revolucionaria marxista-leninista. En este orden de ideas, los movimientos sociales devienen, en primer lugar, de la reivindicación ante carencias de calidad de vida (vivienda, empleo, seguridad alimentaria, servicios públicos, entre otros) que comportan la no separación del espacio privado

del público.⁷ Segundo, de aquellas reivindicaciones de carácter mucho más general que involucran aspectos como la defensa de la educación pública y los salarios. Tercero, de las luchas identitarias por la autonomía económica y política y del enfrentamiento de clases, cuestiones muy cercanas a los objetivos de los grupos guerrilleros.

En Touraine (1978), los movimientos sociales tienen la posibilidad de transformar la vida social, superando la defensa de los intereses individuales y afirmando su capacidad específica de intervenir en la formación de políticas generales y de defensa del cuerpo social.

Sin embargo, bajo esta perspectiva, el prototipo de organización que soporta las acciones colectivas no parece responder a estructuras organizativamente fuertes y permanentes en el tiempo. Aún más, habría que decir que en América Latina no existirían muchas posibilidades de generar una sociedad civil activa, promotora de capital social, entre otras razones, porque las acciones colectivas están supeditadas a instituciones cuyas pautas de socialización política tradicional terminan haciendo que el rumbo de las acciones colectivas dependa del ejercicio del Estado, y esta dependencia habría frustrado su capacidad de autonomía. Por consiguiente, la misma noción de “mayoría de edad” kantiana imperante en el discurso liberal, que supone la existencia de capital social positivo, choca con el relativismo cultural que explica al individuo como subordinado a instituciones tradicionales circunscritas a la esfera privada; de manera que los espacios vitales de interacción social no sobrepasan lo que permite el ambiente de la familia.⁸

En consecuencia, las posibilidades de extender la interacción social, asumiendo el factor riesgo en nuevos contratos, son limitadas, cuestión que explica en el plano simbólico la injerencia de las relaciones filiales de la “hacienda” en la esfera pública. Así, subculturas políticas derivadas, como las del caciquismo y el clientelismo, han moldeado la administración del

⁷ De acuerdo con la tradición griega, en el espacio privado se suplen las necesidades básicas de carácter económico. Mientras tanto, el espacio público es el lugar del ejercicio político, de la discusión de los intereses colectivos y del reconocimiento de los individuos como iguales en capacidad de interlocución.

⁸ En Putnam (2000), es posible distinguir entre capital social positivo y negativo. El primero, generador de virtudes cívicas consecuentes con la ampliación del espacio público y el fortalecimiento de redes sociales impulsoras de instituciones formales y el progreso económico; el segundo, promotor de círculos cerrados que originan contubernios y redes delictivas.

Estado, y los movimientos sociales terminan siendo tutelados de una u otra manera por este. En tanto las elites políticas (oligarquías), formadas durante las guerras de independencia, desarrollaron mecanismos de control social que rubricaron ejerciendo el gobierno hasta manejar a su amañó el ritmo de los acontecimientos. Una caracterización concordante con este tipo de enfoque, partiendo de atributos como la estabilidad de su estructura organizativa, el patrón de discurso y su escenario de intervención, permite decir que lo que ha visto el Cauca en estos últimos tiempos (últimas dos décadas del siglo XX) ha sido la consolidación de tipos de organización ligadas a la categoría de movimiento social (Valles, 2000), donde las formas de articulación de intereses y su permanencia en el tiempo son mucho más débiles que en otro tipo de organizaciones, como los grupos de interés y los partidos políticos tradicionales (véase el cuadro 2).⁹

Efectivamente, se trata de organizaciones (clubes, asociaciones y otros) de tamaño variable que eventualmente consolidan redes y se movilizan cuando se presenta una ocasión. No constituyen una organización única, ni cuentan con un programa expreso de acción, pero nacen del rechazo a los canales institucionales y a las formas convencionales de revelación de preferencias. Por ello recurren a acciones que van desde cadenas humanas, pasando por acciones directas que incluyen algún grado de violencia, hasta la resistencia civil, que involucra el incumplimiento de obligaciones legales.¹⁰ Asimismo, vale la pena resaltar que los movimientos sociales combinan en sus objetivos y estrategias una doble lógica (Valles, 2000, p. 341). Por una parte, se erigen en instrumentos de participación dentro del proceso político y, por otra, se proponen obtener de esta actividad resultados prácticos, obligándose a entrar en contacto con el poder establecido o confrontándolo para negociar y pactar con él.

⁹ Una característica importante de los grupos de presión es que se reconocen como asociaciones voluntarias cuyo objetivo principal es influir en el proceso político defendiendo propuestas que afectan a los intereses de un sector determinado de la comunidad (trabajadores asalariados, empresarios, etc.). Persiguen objetivos políticos determinados, pero sin aspirar a un proyecto global de gobierno (Galvis, 2005). Huelga decir que no se asumen aclaraciones más

amplias para los partidos políticos por gozar de mayor tradición y despliegue académico.

¹⁰ En todas ellas suelen tenerse muy en cuenta la repercusión mediática y la acción sobre la opinión pública para defender una causa.

CUADRO 2

Tipología ideal de actores colectivos

Criterios	Tipos		
	Movimientos sociales	Grupos de interés	Partidos políticos
Grado de estructuración	Variable	Fuerte, estable	Fuerte, estable
Discurso	Transversal	Sectorial	Global
Escenario preferente de actuación	Social, no convencional	Institucional, social	Institucional

Fuente: J. Valles, *Ciencia política: una introducción*, Barcelona, Ariel, 2000.

IV

Historia de las movilizaciones en el Cauca entre 1990 y 2004

En el caso colombiano, la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC), en 1970 y finales de los años sesenta respectivamente, ejemplifica la trascendencia de las movilizaciones en el concierto del desarrollo regional.¹¹ Pero el hecho de que este tipo de manifestaciones se hayan dado en el departamento del Cauca, ¿implica que existe capital social, conforme lo muestran la teoría y la evidencia nacional e internacional?

A lo largo de toda su historia, el departamento del Cauca vivió una serie de manifestaciones colectivas, en su mayoría vinculadas a la insurgencia guerrillera, que luego tomaron un rumbo singular en la década de 1990.¹² En vista de estas y otras revelaciones, se señala al Cauca (Cuéllar, 2000) como depositario mayor de este recurso en Colombia.

¹¹ Es importante relevar que las nuevas formas de acción, que reemplazaron a la vieja lucha de clases, recurrieron a figuraciones mediáticas como las que se vieron en la actuación del Ejército Zapatista por la Liberación Nacional (EZLN) en México o las que han acompañado al Foro Social en Brasil. Es más, este tipo de cambios favoreció que crecieran los movimientos antiglobalización, que abogan por la equidad y la justicia global junto con reivindicaciones étnicas y culturales. Son ejemplos de ello, el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra del Brasil, los piqueteros de la Argentina y los cocaleros de Bolivia. Obsérvese que los grupos protagonistas de este tipo de manifestaciones han sido indígenas, obreros, campesinos sin tierra y pequeños productores víctimas de la competencia internacional que sobrevino con el nuevo modelo de desarrollo del mercado.

¹² Quizás una de las primeras muestras visibles de la beligerancia del departamento se vio surgir en la década de 1910, con el levantamiento indígena dirigido por quien se convirtiera en un mítico dirigente: Manuel Quintín Lame (Jaramillo, 2003). Lame confrontó a su etnia con los valores hegemónicamente dominantes, constituyéndola en una fuerza que tuvo que tenerse en cuenta en las relaciones de poder. Más tarde, su nombre sería utilizado por una facción guerrillera que tendría su mayor despliegue en los años ochenta.

Asimismo, se convirtió en uno de los centros de la confrontación armada a raíz de la consolidación de la insurgencia guerrillera que viviera el país desde finales de la década de 1940 y que tomara mayor aliento con el impulso de la revolución cubana. De tal manera que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Comando Pedro León Arboleda, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el grupo guerrillero Jaime Bateman Cayón y el Quintín Lame, entre los principales, estuvieron o están asentados en este territorio.

Este proceso logró hacerse visible con la primera movilización efectuada en 1987, aunque ya entre 1980 y 1985 algunos municipios experimentaban actividades en la materia, como ocurrió en Santa Rosa, Bolívar y en corregimientos como el Rosal (San Sebastián), que deciden hacer un “diagnóstico” o listado de las necesidades apremiantes (Jaramillo, 2003), dando lugar al paro de Bolívar en diciembre de 1985 y al paro de Sucre en mayo de 1986. Pero definitivamente es la marcha de 1987 la que marca un derrotero irreversible hacia la constitución de un movimiento social de dimensiones sobresalientes. El centro de sus reivindicaciones era la terminación de la carretera a Santa Rosa y el mejoramiento del tramo construido, aunque el pliego demandaba la solución de otras necesidades.

Desde allí se empieza a identificar a la Carretera Panamericana como un símbolo de lucha eficaz (Jaramillo, 2003; Tocancipá, 2004) tras el agotamiento de los canales institucionales y la comprobación de que las reglas de juego impuestas por el régimen no posibilitaban negociaciones en los escritorios, ni en las oficinas gubernativas, sino en los espacios donde las fuerzas se ponían en tensión. El grueso de los marchantes era de Santa Rosa y San Sebastián; su resultado fue el logro de algunos de sus objetivos, pero se crearon, entre otras cosas, nuevos recursos de asociatividad no necesariamente derivados de la acción guerrillera.¹³

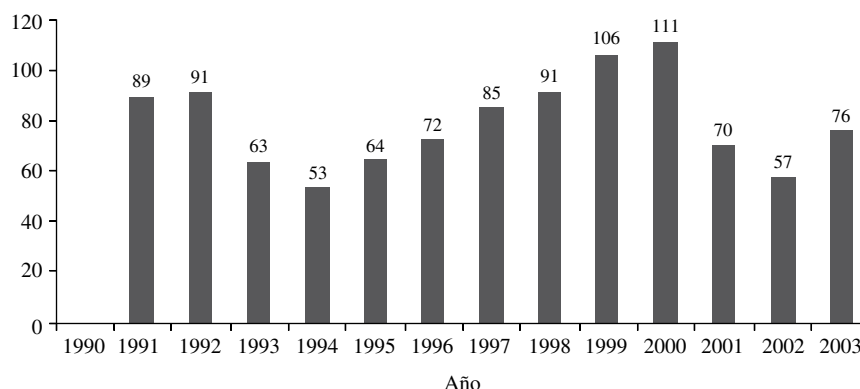
En la penúltima década del siglo XX se registró una especie de inflación de las movilizaciones (véase el gráfico 1), que coincidió con la implantación de la primera generación de reformas económicas tras la conmoción que desató la crisis del endeudamiento externo de la década de 1980, y que a mitad del período se intentó suavizar con la terminación de un período presidencial y el comienzo de otro.

La culminación del gobierno de César Gaviria, quien había acelerado el ritmo de implementación de las reformas económicas, contrastó con la de Ernesto Samper, que quiso frenar el ímpetu de las medidas de

¹³ La movilización solo llegó hasta Guachicono, por lo que se le dio ese nombre dado que los negociadores prefirieron contener su avance a la carretera central.

GRÁFICO 1

Número de acciones colectivas en el departamento del Cauca, 1990-2002



Fuente: J. Agredo y L. Flórez, "Hacia una caracterización de las acciones colectivas en el Departamento del Cauca (1990-2002)", Tesis de grado, Popayán, Universidad del Cauca, 2005.

su antecesor, dándole un poco más de protagonismo al Estado en materia de inversión social.

Sin embargo, la pérdida de gobernabilidad que sobrevino ante los escándalos de corrupción y la penetración del narcotráfico en la arena política parece haber corroído aún más la legitimidad de las instituciones, tanto como para que las acciones colectivas reivindicativas siguieran su marcha e incluso se incrementaran como bien lo muestra la terminación del segundo cuatrienio de la década. Pero las expectativas de cese al fuego y el intento fallido de pacto de paz con la guerrilla de las FARC, que a la postre escaló la acción guerrillera y paramilitar, parecen haber facilitado la profundización del modelo de desarrollo imperante desde principio de la década. En este sentido, se consolida la hegemonía ideológica conservadora que se traslada del gobierno de Andrés Pastrana (1994-1998) al de Álvaro Uribe (1998-2002) y se extiende con la reelección de este último.

La demostración de la debilidad institucional parece comprobarse con el incremento de la frecuencia de las movilizaciones, que se eleva en progresión matemática desde 1993 hasta 1999. En efecto, desde que —entre el 20 y el 26 agosto de 1991— se realizó el Primer Paro Cívico Regional del Macizo Colombiano (véase el cuadro 3), se incorporaron a la lucha nueve municipios y se estableció un espectro de necesidades mucho más amplio.

De hecho, 30.000 campesinos llegaron a la Panamericana, en el sitio de Rosas, pero el fragor de la acción colectiva empieza a decaer, pues luego de seis meses de preparación y de lograr la negociación con el grueso de funcionarios del gobierno nacional, los

CUADRO 3

Registro de acciones colectivas en el departamento del Cauca

Año	Número de acciones	Índice de movilización Base 90
1990	89	100,0
1991	91	102,2
1992	63	70,8
1993	53	59,6
1994	64	71,9
1995	72	80,9
1996	85	95,5
1997	91	102,2
1998	106	119,1
1999	111	124,7
2000	70	78,7
2001	57	64,0
2002	76	85,4
Total	1 028	

Fuente: cálculos propios sobre la base de información tomada de J. Agredo y L. Flórez, "Hacia una caracterización de las acciones colectivas en el Departamento del Cauca (1990-2002)", Tesis de grado, Popayán, Universidad del Cauca, 2005.

recursos de la acción se derrumbaron. Sin embargo, las movilizaciones continuarían con menor despliegue para repuntar en 1994. Este período tuvo que haber servido para reforzar los argumentos e instrumentos de la lucha en contra de los canales formales de revelación de demandas sociales. Vale resaltar entonces cuatro elementos principales que enlazan la discusión teórica con la evidencia estadística:

- i) La consolidación de anclajes identitarios en el interior de la organización, que se refuerzan con

- la construcción de un enemigo externo más allá de la sociedad mayor (nacional y regional) y su propuesta homogeneizante de desarrollo.
- ii) El fortalecimiento del movimiento como espacio de reconocimiento social y la oportunidad para construir y darle fuerza a la idea de territorio y región.
 - iii) La convalidación de estrategias de confrontación frente a los procesos de formulación e implementación de las políticas públicas.
 - iv) La estructuración variable del movimiento (campesinos, indígenas y afrodescendientes), pero con refinamiento del discurso que se hace patente en la defensa del simbolismo y la cobertura regional; incluso con una mínima priorización de las soluciones que se intentaba obtener.

Efectivamente, la misma envergadura de la movilización sugiere un proceso interno bastante avanzado. Sobre esto, Jaramillo (2003, p. 23) anota:

“La movilización de 1991 es bastante notoria. Mostró una capacidad de organización y de movilización que ya señalaba el futuro de sus acciones. Fue una acción de hecho que no puede reducirse a ella en cuanto tal, sino a que fue producto de un previo proceso organizativo de sectores civiles del campesinado, docentes y activistas políticos de los municipios directamente integrados en la zona geográfica del Macizo colombiano. Su presión produjo la inevitable aceptación de su interlocución por parte del Estado que permitió llegar a una satisfactoria negociación. Sin embargo, en este aspecto quedó la importante enseñanza de que el desconocimiento del manejo y desenvolvimiento interno de las instituciones del Estado, llevó a que la mayoría de lo acordado ya estaba asignado por el gobierno de turno en su plan presupuestal”.

Fue así como el 31 de marzo de 1991 se le dio vida al Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), con la intención de sacar adelante cuatro puntos básicos: i) impulsar la integración local y regional, ii) realizar el primer encuentro cultural del Macizo, iii) sacar el periódico regional, y iv) organizar el primer paro cívico regional de los municipios del Macizo colombiano.

Ya en 1996 las luchas reivindicativas tomaron momentáneamente un camino distinto (Agredo y Flórez, 2005); no se hicieron con una contundente movilización, sino más bien impulsaron la negociación que incluyó a los departamentos del Cauca, Huila y Nariño.

La noción de región como entidad de reconocimiento se expandió y lo hizo por medio de propósitos, tales como el Plan de Desarrollo Ambiental y Agropecuario del

Macizo Colombiano y Sur del Cauca; el plan productivo sostenible e integral; el plan para la convivencia y el plan de ciencia y tecnología. Esto permitió llegar a acuerdos respecto de proyectos que debían ser ejecutados durante los años 1996, 1997 y 1998. Al mismo tiempo, se abarcó un espectro más amplio desde el punto de vista territorial, al incluir a otros municipios que no participaron en la primera movilización, pero que eran cercanos al área de influencia de los primeros municipios movilizados.

Sin embargo, la efervescencia de la movilización pareció caer en un período de aletargamiento. Tres cosas pudieron explicar lo sucedido: primero, los miembros de las organizaciones dieron por cumplidas sus expectativas ante las respuestas concomitantes del Estado y se entró en una fase de cooptación o colaboración con este, cuestión difícil de creer si se revisa el nada honroso segundo lugar del departamento en cuanto a condiciones de pobreza en el concierto nacional. Otra posibilidad, es que la reciedumbre de la lucha antiguerrillera del gobierno de Uribe y la proliferación de grupos paramilitares desincentivaron las movilizaciones masivas y disuadieron a las organizaciones de acudir a eventos como la toma de la Carretera Panamericana, so pena de tratamientos similares a los reservados a las facciones insurgentes por parte de la fuerza pública. Esta clase de fenómeno no se puede descartar, pues el despliegue paramilitar acompañó a las consignas en pro de la restitución del uso de la fuerza al Estado y el orden institucional, con la consecuente represión de muchas expresiones de protesta social. Tercero, pudo haber ocurrido que los lazos de integración dentro de la macroorganización se debilitaron a tal punto, que solo organizaciones como el CIMA y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) salieron suficientemente fortalecidas y quisieron desligarse de aquellas cuya estrategia respondiera a la figura del “polizón” u oportunista (*free rider*).

Así, tras apartar a los organismos que lucraron de la lucha con el mínimo esfuerzo, las estructuras más comprometidas pasaron a nuevas formas y recursos de acción, en que la consolidación de redes nacionales e internacionales les permitió crear bases mucho más fuertes de capital social que entrañan una actitud más propositiva y autónoma frente a la administración del poder. Sin embargo, una hipótesis como esta significaría aceptar con Olson (1982) que las estructuras organizativas más centralizadas y menos deliberativas (horizontales) serían las que a la postre crearían los lazos de confianza que señalan la existencia de capital social.¹⁴ Asimismo,

¹⁴ En este análisis, las organizaciones que por fuerza de la tradición se consideran verticales son fundamentalmente sindicatos, partidos políticos y entes religiosos.

se habría asumido la adopción de una postura más instrumental de sus miembros tendiente al logro de sus objetivos. Quizás por eso las acciones colectivas son cada vez menos espontáneas, dado que durante el período el 84% de estas obedecieron a formas de organización más elaboradas (véase el cuadro 4).

Lo anterior implicaría renunciar a la interpretación putnamiana que señala el éxito de la creación de capital social positivo en la existencia de organizaciones del tipo horizontal y descentralizado, con las que la organización indígena parece comulgar. Como lo demostrarían el reclamo de mayor participación y el rechazo a los canales institucionales de gestión de demandas que plantea la verticalidad del proceso de producción de políticas públicas.¹⁵

Sin embargo, la movilización indígena propiamente dicha ha fluctuado en alrededor de casi cuatro acciones por año. La mayor fuente de movilizaciones ha sido la recuperación de tierras y el incumplimiento de acuerdos.

Pero conforme las medidas de ajuste macroeconómico y la recuperación de las facultades coercitivas del Estado —secundadas por ejércitos ilegales— tuvieron mayor acento (1997 a 2001), la tendencia ha llegado

a superar el promedio hasta alcanzar un máximo de seis acciones. De manera que si las acciones colectivas se refinaron entrando en la etapa de la gestión, no se abandonaron las formas y los recursos desplegados en toda la década de 1990. Esto confirma que si bien las luchas mancomunadas decayeron, los indígenas pudieron mantener las formas de acción (marchas y retenes) aunque no su ritmo. Tal parece que se mantuvieron como fines inmediatos de la reunión, el encuentro y el reconocimiento étnico, aprovechando que el símbolo del enemigo externo ya estaba creado y habría que recordarlo: el modelo económico homogeneizante (Montoya, 2006) y la sociedad mayor que los separa de la tierra. Mientras tanto, se depuraron virtualmente las demandas (tierras e incumplimiento de acuerdos) y se avanzó en la consolidación de asociaciones cooperativas con este fin (véase el gráfico 2).

Por otra parte, los campesinos —ayer aliados de los aborígenes— tendieron a alejarse, entre otras cosas, porque el mayor acceso mediático de las elites regionales, en convivencia con la filosofía del modelo político pregonado por el gobierno del Presidente Uribe, señaló el peligroso avance de una contrarreforma agraria agenciada por los indígenas, que en su afán de recuperar tierras

CUADRO 4

Movimiento indígena

Año	Acciones	Asunto	Formas de acción	Duración (días)	Resultados predominantes	Presencia de violencia
1990						
1991	3	Tierras	Marchas	Un día	Ningún acuerdo	No
1992	4	Políticas de gobierno	Marchas	Un día	Ningún acuerdo	No
1993	1	Políticas de gobierno	Marchas	Un día	Ningún acuerdo	No
1994	2	Vivienda	Tomas de lugar	Un día	Ningún acuerdo	No
1995	3	Políticas de gobierno	Marchas	Un día	Ningún acuerdo	No
1996	5	Tierras	Tomas de lugar	De 1 a 8 días	Acuerdos escritos	No
1997	2	Políticas de gobierno	Marchas	Un día	Ningún acuerdo	No
1998	5	Políticas de gobierno	Tomas de lugar	Un día	Acuerdos escritos	No
1999	6	Incumplimiento de acuerdo	Bloqueo y retenes en vías	De 2 a 8 días	Acuerdos escritos	No
2000	3	Incumplimiento de acuerdo	Marchas	Un día	Sin acuerdo	No
2001	4	Incumplimiento de acuerdo	Bloqueo y retenes en vías	Un día	Sin acuerdo	No
2002	6	Incumplimiento de acuerdo	Bloqueo y retenes en vías	Un día	Sin acuerdo	No
<i>Total</i>	<i>44</i>	<i>Incumplimiento de acuerdo</i>				

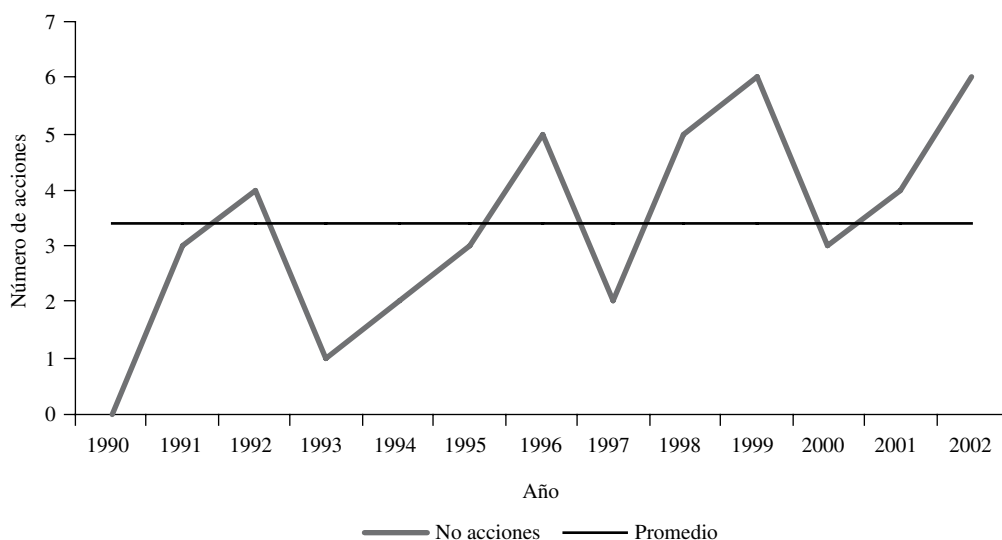
Fuente: J. Agredo y L. Flórez, "Hacia una caracterización de las acciones colectivas en el Departamento del Cauca (1990-2002)", Tesis de grado, Popayán, Universidad del Cauca, 2005.

¹⁵ Según Cuéllar (2000a), para Olson las organizaciones horizontales pueden llegar a obstaculizar el crecimiento económico si se convierten en grupos de interés en procura de intereses preferenciales que imponen costos desproporcionados a la sociedad. Esto es, cuando surgen en torno de la solidaridad para conspirar contra el bien público, restringir la

libertad individual o la iniciativa empresarial. Para Coleman (1990) el cierre de grupo (clausura), las normas sociales que producen un efecto de "externalidad", y la posibilidad de obtener beneficios individuales tanto en organizaciones verticales como horizontales, actúan como impulsores del progreso.

GRÁFICO 2

Acciones colectivas del movimiento indígena en el Cauca, década de 1990



Fuente: Agredo, Juliana y Flórez, Lorena, "Hacia una caracterización de las acciones colectivas en el Departamento del Cauca (1990-2002).

dejarían sin el recurso no solo a los viejos latifundistas, sino a los pequeños propietarios. Luego, la amenaza de los nuevos "terratienientes" debería contrarrestarse con el ejercicio legítimo de la violencia a cargo del Estado, en función de la defensa de la propiedad privada. Asimismo, el sincretismo étnico que acompaña a los campesinos, en su mayoría mestizos, devela diferencias culturales con respecto a los indígenas que involucran formas distintas de asumir el mercado y la economía, y de anteponer los intereses de la comunidad por sobre el individuo. E incluso la misma relación simbólica con la tierra los ha hecho diferentes a unos de otros.

Todo el análisis anterior contrasta con la teoría que sustenta la evidencia internacional y con estudios nacionales como los de María Mercedes Cuéllar (2000). La autora, que mide el capital social como frecuencia de participación en organizaciones horizontales, sostiene para el caso colombiano que:¹⁶

¹⁶ En un estudio similar, Sudarsky (1999) cuestiona este tipo de metodologías, toda vez que para él la participación cívica es apenas una dimensión del capital social. Asegura que factores como confianza institucional, agrupación política, control de la sociedad sobre el Estado y jerarquías son elementos que Putnam desecha y que Cuéllar tampoco considera. Agrega que la vinculación vertical produce mayor capital social y que las actividades vinculadas a los medios de comunicación se relacionan con capital social, pero la confianza con respecto a ellos está condicionada por un segundo factor que denomina "fe en fuentes de información no validadas" (FENOVAL).

"...Los mayores índices de actividad asociativa se encuentran en su orden en los departamentos del Cauca, Risaralda, Cundinamarca, Distrito Capital, Santander y Boyacá. En contraste, donde esta es menor es en la Guajira, Sucre, Quindío, Meta, Bolívar, Tolima, Caldas y Atlántico" (2000b, p. 28).

No obstante, las condiciones socioeconómicas del departamento y la dinámica de la movilización social muestran distorsiones importantes. En primer lugar, este tipo de análisis no compromete la idea de acción colectiva con la generación de redes de cooperación entre organizaciones, que asumiremos más adelante. En segundo lugar, el concepto de capital social rebasa la categoría de movimiento social, pues si bien los propósitos de la movilización social generaron, durante los primeros años de la década, los niveles de concentración y articulación de las organizaciones, ello decae al final del decenio sin confirmar aún que la mayor participación en entidades asociativas contribuye a disminuir la pobreza. Convendría agregar que todo capital social encarna un movimiento social, pero no todo movimiento social se convierte en capital social. Lo que parece haberse logrado ha sido el fortalecimiento de las organizaciones indígenas, pero sin verificarse que el proceso de aglutinación identitaria haya servido para consolidar redes de cooperación en el interior de la sociedad civil regional.

Tercero, la intensidad de la acción colectiva tampoco ha servido para acercar la sociedad civil al Estado, más bien ha permitido consolidar las identidades indígenas y campesinas alrededor del rechazo a los canales institucionales, logrando que los resultados en materia de políticas públicas se hayan generado mediante estrategias de confrontación más que de cooperación. Tampoco lo ha permitido el proyecto conservador (integracionista) inmerso en la planeación del desarrollo nacional y regional, pese a la ampliación formal de la participación. Cuarto, no hay una relación simbiótica entre la acción de los movimientos sociales, el capital social y los niveles de ingreso (Cuéllar, 2000). Los sectores y lugares más deprimidos son los que ostentan mayores acciones colectivas. Quinto, la relación entre movimiento social, capital social y capital humano no resulta significativa, en la medida que los movimientos indígenas —que no detentan los mayores niveles de escolaridad— son los más consistentes y persistentes en sus acciones colectivas.

Esto demuestra que la educación formal no revitaliza dicha relación y que otro tipo de saberes pueden dar mejor cuenta de la idea de una organización fuerte. Sexto, el crecimiento económico no es causa ni consecuencia del capital social en el departamento, pero sí de la movilización, en tanto el rechazo a los impactos de la ortodoxia apologista del mercado ha podido generar acciones de reconocimiento regional.

Si bien no es posible asegurar la relación simbiótica entre capital social y movilización social (acción de movimientos), sí se puede decir que son semillas de lo que este recurso puede representar para la región. En definitiva, el movimiento indígena y las consecuentes movilizaciones fueron los grandes beneficiados de todo este período. Se constituyen entonces en un “movimiento social organizado”, pero de ello no se desprende que exista capital social, no por lo menos a la luz de las concepciones de autores clásicos como Putnam, Leonardi y Nanetti (1993) o Coleman (1990).

V

Dependencia de la historia en la determinación del capital social

La relación entre los factores culturales y el desempeño económico de largo plazo no ha podido ser demostrada con claridad, debido a la endogeneidad de la primera variable (Durlauf y Fafchamps, 2005). Sin embargo, para muchos autores la cultura afecta al devenir de las instituciones políticas y económicas, las que constituyen la causa fundamental de las diferencias comparativas en los niveles de desarrollo.

La utilización de los microanálisis para identificar la dinámica subyacente en una región es una herramienta sencilla, pero de gran potencial explicativo al tomar el municipio como unidad de análisis, base del desarrollo local. Mostraremos hasta qué punto en el período comprendido entre 1951 y 2005 hubo convergencia en los niveles de desarrollo de los municipios del Cauca, teniendo en cuenta características como la presencia de la cultura indígena o de instituciones de origen colonial.

La convergencia beta (o absoluta) ocurre cuando los países/regiones o localidades más pobres crecen más rápido que las más ricas. Por su parte, la convergencia sigma (o condicional) ocurre cuando para un grupo de países/regiones o localidades la varianza de sus ingresos

per cápita tiende a reducirse en el tiempo, hasta que los más pobres alcanzan a los más ricos en términos per cápita (Rey y Montouri, 1998). Sin embargo, dada la inexistencia de un sistema de cuentas regionales, se utilizó el crecimiento poblacional como una *proxy* (variable sustitutiva) al crecimiento económico, sobre la hipótesis Tiboutina, que sostiene que la mayor disponibilidad de bienestar y crecimiento genera emigraciones y crecimiento poblacional desde zonas de menor eficiencia y bienestar social hacia las de mejores condiciones de progreso y disposición de bienes públicos.

Se corrieron seis regresiones por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para estimar los siguientes modelos:

$$(1) \quad g = \beta_0 + \beta_1 * LnPop_0 + \varepsilon$$

$$(2) \quad g = \beta_0 + \beta_1 * LnPop_0 + \beta_2 * Indígena + \varepsilon$$

$$(3) \quad g = \beta_0 + \beta_1 * LnPop_0 + \beta_2 * Dummcol + \varepsilon$$

$$(4) \quad g = \beta_0 + \beta_1 * LnPop_0 + \beta_2 * Indígena + \beta_3 * Dummcol + \varepsilon$$

$$(5) \quad g = \beta_0 + \beta_1 * LnPob_0 + \beta_2 * Indígen + \beta_3 * Dummmcol + \beta_4 * predios + \varepsilon$$

$$(6) \quad g = \beta_0 + \beta_1 * LnPob_0 + \beta_2 * Indígen + \beta_3 * Dummmcol + \beta_4 * predios + \beta_5 * DisPop + \varepsilon$$

Donde:

g es la tasa de crecimiento de la población en el período 1951-2005.

$LnPob_0$ es el logaritmo natural de la población en el año inicial (1951).

$Indígen$ es la población indígena por municipio en el año 1998.

$Dummmcol$ es una variable ficticia (*dummy*) utilizada como *proxy* de Colonia, que toma valores de 1 si el municipio fue fundado en los siglos XVI y XVII, o valores de cero si el municipio fue fundado en los siglos XVIII, XIX o XX.

$predios$ es el número de predios per cápita en el municipio en el año 2002.

$DisPop$ es la distancia geográfica en kilómetros desde cada municipio hasta Popayán.

En el modelo (1) se muestra la tradicional hipótesis de convergencia beta, y en los restantes se intenta capturar el impacto de la historia colonial en el desarrollo de los municipios del Cauca. En particular, $Indígen$, $Dummmcol$ y $predios$ procuran recoger la herencia colonial bajo la hipótesis de que aquellos municipios fundados durante la Colonia, con mayor concentración de la tierra, con mayor población indígena o con ambos poseen un legado colonial mayor, capaz de incidir en su desarrollo. $DisPop$

busca medir el impacto de la geografía en el desarrollo municipal, dado que Popayán no solo es la capital del departamento del Cauca, sino que además está localizada sobre la Panamericana, la principal carretera capaz de articular al Cauca con el norte y sur del país; entre más alejado se esté de Popayán es posible que haya una menor actividad económica.

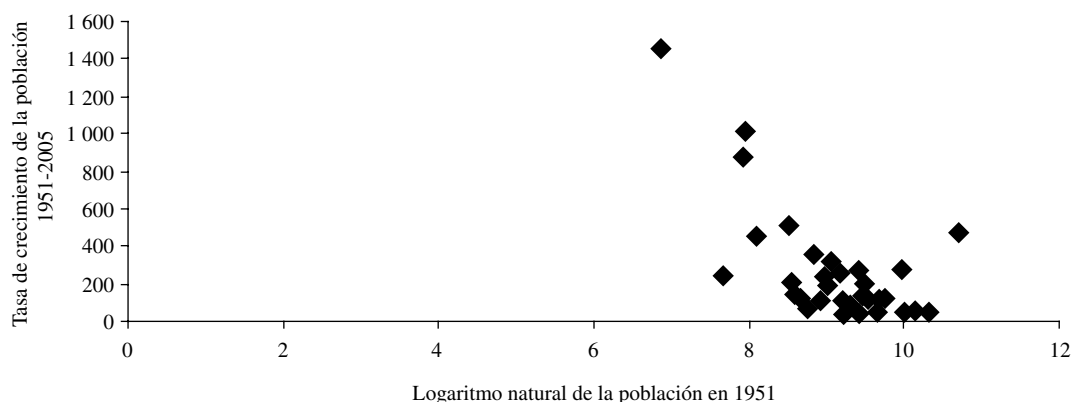
Los resultados del análisis en el gráfico 3 evidencian que, para el período de estudio, la correlación de la tasa de crecimiento de la población del departamento del Cauca entre 1951 y 2005 con el logaritmo natural del tamaño de la población en 1951 (inicio del período) tuvo una tendencia decreciente, indicando la presencia de convergencia beta, tal como lo muestra también el coeficiente de correlación estimado (-0,66). Este proceso puede explicarse por los fenómenos migratorios intermunicipales, y es acorde con los resultados de Bonet y Meisel (1999) en los que el Cauca aparece como un departamento convergente.

Los resultados de las estimaciones por MCO de los modelos formulados se presentan en el cuadro 5. En general, los modelos no tienen fuertes sesgos de especificación.

De los modelos regresados, el de mejor ajuste fue el modelo 6. Las variables predios, distancia de Popayán y tasa de crecimiento de la población en el año 1951 mostraron signo negativo, lo que significa que cuanto menor sea el número de predios per cápita en el municipio, menor sea la distancia de Popayán y menor haya sido el crecimiento en el año 1951, el municipio experimentará un mayor desarrollo. La variable Colonia resultó ser poco significativa en las regresiones 3, 4 y 5, lo que evidencia que si el municipio fue fundado durante

GRÁFICO 3

Departamento del Cauca: convergencia beta en las dinámicas poblacionales, 1951-2005



Fuente: cálculos propios sobre la base de información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Censos de Población.

CUADRO 5

Desarrollo e instituciones en el Cauca
(Convergencia beta poblacional)

Variables ^a	LN TCP ₁₉₅₁₋₂₀₀₅ (1)	LN TCP ₁₉₅₁₋₂₀₀₅ (2)	LN TCP ₁₉₅₁₋₂₀₀₅ (3)	LN TCP ₁₉₅₁₋₂₀₀₅ (4)	LN TCP ₁₉₅₁₋₂₀₀₅ (5)	LN TCP ₁₉₅₁₋₂₀₀₅ (6)
LN TCP ₁₉₅₁	-256,0391 (51,44315) ^b	-185,1979 (52,35486) ^b	-270,5674 (54,14719) ^b	-201,2122 (52,29970) ^b	-200,9329 (51,82363) ^b	-208,6150 (51,51182) ^b
Población indígena		0,017280 (0,005982)		0,017058 (0,005856) ^b	0,015642 (0,005914) ^b	0,014117 (0,005956)
Colonia			-0,283179 (0,318740)	120,9314 (84,59463)	134,4677 (76,56500)	140,8214 (75,76432)
Predios					-0,303728 (0,245084)	-0,382603 (0,249414)
Distancia de Popayán						-0,367358 (0,280693)
Constante	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Número de observaciones	33	33	33	33	33	33
Estadístico F ^c	24,77180 (0,000023)	19,49182 (0,000004)	12,69638 (0,000101)	14,34427 (0,000006)	11,34093 (0,000013)	9,646287 (0,000023)
R ²	0,444164	0,565114	0,458413	0,597406	0,618340	0,641107

Fuente: cálculos propios sobre la base de información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Censos de Población.

Notas: LN TCP₁₉₅₁₋₂₀₀₅: Logaritmo natural de la tasa de crecimiento de la población entre 1951 y 2005.

LN TCP₁₉₅₁: Logaritmo natural de la tasa de crecimiento de la población en 1951.

^a Los paréntesis bajo los coeficientes de regresión corresponden a desviaciones estándar.

^b La variable es significativa al 5%.

^c Valor P entre paréntesis.

la Colonia ello no se relaciona con su grado de desarrollo. Esta relación cambia cuando se introduce la distancia de Popayán en el modelo 6, donde se torna significativa al 10%. Finalmente, la mayor población indígena en el municipio resultó ser una variable significativa que afecta positivamente al desarrollo.

La tasa de crecimiento promedio de la población de los municipios del departamento del Cauca, durante los distintos períodos intercensales, deja ver una clara reducción de dinamismo, pasando del 84,64% en el período 1951-1964 a un 4,55% en el lapso 1993-2005 (véase el cuadro 6). Al parecer, hasta los años sesenta el departamento del Cauca presentó una dinámica intrarregional convergente, entendida como la necesidad de crecer a tasas superiores para alcanzar los niveles de crecimiento de los municipios con mayor desarrollo.¹⁷ A partir de entonces, pareciera que las disparidades han aumentado.

La dispersión en los valores de las tasas de crecimiento de la población por municipio en el departamento comprueba esta última hipótesis, puesto que se advierte un incremento en la dispersión del crecimiento para el período 1964-2005 con respecto al mismo análisis para el período 1954-2005 cuyo coeficiente de variación es mayor.

Los resultados muestran, además, (véase el cuadro 6) que la década comprendida entre 1954 y 1964 es históricamente decisiva para la comprensión de la dinámica de la población del Cauca y su desarrollo. Durante ese período el departamento experimentó uno de los episodios más convergentes en su historia, que coincidió precisamente con el proceso de Reforma Agraria.

En resumen, las estadísticas del departamento del Cauca denotan que los municipios con mayor población indígena han experimentado una tasa más elevada de crecimiento de la población. Además, aquellos municipios fundados durante la Colonia tienen más posibilidades de desarrollo que los fundados durante la República, si están más cercanos a la capital del departamento, evidenciando la influencia de las relaciones coloniales con jerarquías cercanas al centro.

¹⁷ Este resultado concuerda con el de Bonet y Meisel (1999), en que muestra convergencia para Colombia entre 1960 y 1990, pero total divergencia a partir de 1990.

CUADRO 6

**Municipios del Cauca: evolución intercensal
de las tasas de crecimiento de la población**

Tasa de crecimiento de la población (TCP), municipios del Cauca - intercensal					
Municipio	TCP 1951-1964	TCP 1964-1973	TCP 1973-1985	TCP 1985-1993	TCP 1993-2005
Desviación estándar	105,9756685	25,33207284	28,35564532	39,50692188	23,3905385
media	84,64455714	16,94496384	12,44300049	38,04881357	8,363971579
mediana	46,96828358	18,10022928	9,213949929	30,86376812	6,375710574
Coefficiente variación	1,252008069	1,494961752	2,27884306	1,038322044	2,796582733

Fuente: cálculos propios sobre la base de información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Censos de Población.

VI

Densidad y redes asociativas: elementos de la confianza pública

Como no toda asociatividad es portadora de capital social y tampoco hay capital social sin asociatividad, resulta necesario discernir los precursores del activo fuera de los ya examinados y establecer sus repercusiones en términos de la articulación de demandas, consolidación de redes y expansión de la confianza.

Un primer paso es estipular los alcances de la densidad asociativa. De este modo, el número de organizaciones de la sociedad civil con respecto al total de la población resulta un indicador fundamental si se trata de los pilares sobre los que se construyen redes generadoras de cooperación y confianza. Conviene anotar que el sustento de estas afirmaciones se basa en un modelo de análisis cualitativo aplicado mediante encuestas a las organizaciones de la sociedad civil inscritas en la Cámara de Comercio y en la Gobernación del Cauca hasta el año 2006. Así, de las 3.951 organizaciones inscritas en los dos estamentos, solo se pudo constatar actividad en 2.035. De allí se encuestaron alrededor de 300 unidades, donde el informante promedio fue el representante legal o alguna persona del nivel directivo.¹⁸

Dicho esto, la información disponible condujo a pensar un panorama regional con una zona centro que aglomera la mayor cantidad de organizaciones y registra

un alto número de movilizaciones sociales contestatarias, pero que se erige en el eje de la gobernabilidad del departamento sobre la base de relaciones clientelares no generadoras de alto nivel de actividad económica. Le sigue una subregión norte, que ostenta altos niveles de densidad y participación asociativa, y donde se concentra la dinámica económica, pero que paradójicamente funciona como un enclave que sobresale por un impacto relativamente escaso en términos distributivos y que además registra una alta conflictividad y violencia de tinte urbano (más hacia la frontera con el vecino departamento del Valle del Cauca), y rural por la posesión de la tierra al nororiente. Luego una subregión al sur, con nuevos vientos de aglomeración asociativa que busca abrirse camino económico sobre la base de una estructura productiva campesina. En seguida una región oriental con dificultades manifiestas de conectividad, donde la base social es predominantemente indígena y cuyos niveles de actividad social se orientan a la recuperación de la identidad y a demandas sociales ante el abandono del Estado. Finalmente, una región occidental ubicada en el litoral del Pacífico, también con problemas de conectividad, de población predominantemente negra, con una actividad económica cifrada en los cultivos de subsistencia, recientemente colonizada por cultivos industriales como la palmicultura, introducida por una avanzada importante de empresarios de la zona andina (eje cafetero), que convive con los cultivos ilícitos. En paralelo, presenta una baja actividad asociativa y es

¹⁸ La selección de la muestra se hizo a través de muestreo aleatorio simple. Cabe anotar que dadas las dificultades de conectividad y la accidentalidad topográfica, se procedió a realizar las encuestas telefónicamente.

presa de las redes clientelares, lo que se mezcla con la presencia paramilitar que desplazó el protagonismo guerrillero (véase el gráfico 4).

De este modo, la accidentalidad topográfica que aminora la conectividad y la hegemonía de las redes clientelares que acentúa la dependencia de la trayectoria generan una débil gobernabilidad, que desfavorece una legitimación política capaz de articular demandas y coordinar la acción colectiva. En consecuencia, el fraccionamiento subregional parece augurar tensiones secesionistas, en especial de la región norte del Cauca que posee la mayor densidad organizativa, seguida por la región del Macizo (véase el cuadro 7). Ambas regiones caracterizadas por la marcada presencia de grupos étnicos, principalmente indígenas. En efecto, el rol de la sociedad civil y el capital social parecen estar igualmente ausentes en un horizonte de largo plazo que privilegie la sostenibilidad del crecimiento, la mejor distribución del ingreso y simultáneamente la buena gobernanza.

En la medida en que las relaciones clientelares operan como una fuerza centrífuga que contribuye a dispersar los intereses subregionales, se derrumba la competitividad de las estructuras productivas sin el aporte proveniente de una sociedad civil empoderada que complementa y legitime la acción del Estado. Sin embargo, como se trata de un conjunto de relaciones personales que opera como

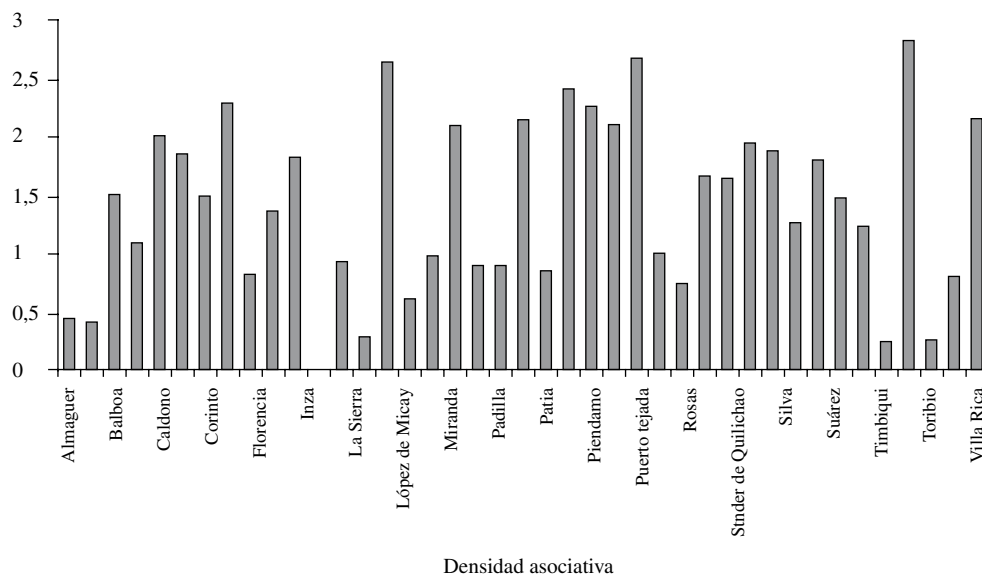
extensión de redes de ayuda mutua, cualquiera podría decir que cabe en el marco conceptual del capital social expuesto en secciones anteriores de este trabajo, pero se trata de una forma vertical, asimétrica, de “capital social individual” que brota desde el oriente y se promueve desde los grupos indígenas también como capital social “hacia adentro”. Los dos parecen crear una mezcla de desarticulación y conflictividad, del tipo juego de suma cero. Empero, es necesario examinar con mayor detenimiento la conformación de redes alrededor de programas y proyectos para tener una mejor visión del horizonte del capital social en el departamento.

En efecto, los resultados confirman un tanto lo que han vaticinado las observaciones acerca de la dependencia de la trayectoria y el trasegar de las movilizaciones en la década de 1990. Como se aprecia en el cuadro 8, ha habido un precario capital social externo en la medida en que más del 75% de las organizaciones actúan de manera particular; si se recuerdan los mecanismos de apropiación de rentas desplegados desde el auge de la hacienda y la naturaleza de la actividad minera, lo que parece estar reproduciéndose es la constitución de organizaciones para actuar como captadoras de rentas (*rent seekers*).

De hecho, a partir de una mirada al tiempo de vida de las organizaciones (véase el gráfico 5) se puede establecer

GRÁFICO 4

Densidad asociativa en el Cauca (municipal) (Por mil personas)



Fuente: cálculos propios sobre la base de resultados de la encuesta.

CUADRO 7

Densidad subregional en el Cauca^a

Subregión	Número de habitantes total regional	Subtotal organizaciones	Porcentaje de organización sobre total regional (por mil habitantes)	Densidad subregional
Norte	363 992	526	25,85	1,45
Sur	216 689	241	11,84	1,11
Centro	465 032	234	11,50	0,50
Bota caucana	76 219	88	4,32	1,15
Macizo	65 068	90	4,42	1,38
Pacífico	154 236	114	5,60	0,74
Oriente	76 219	88	4,32	1,15

Fuente: cálculos propios.

^a La densidad subregional muestra el número de organizaciones sociales por cada mil habitantes en las distintas subregiones del departamento del Cauca.

CUADRO 8

Vinculación con instituciones, proyectos o actividades comunitarias

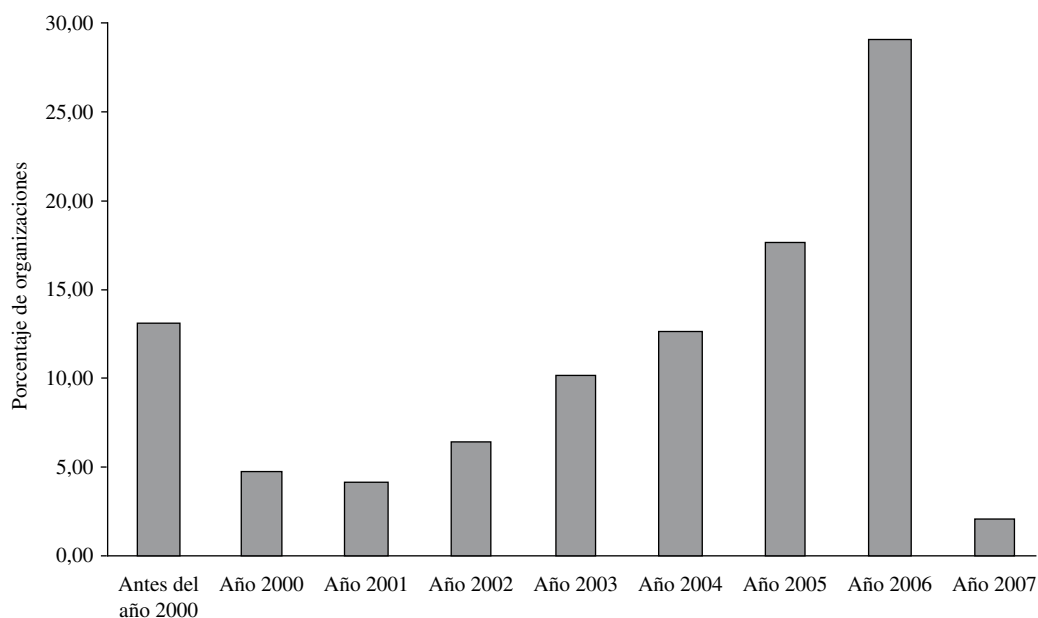
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No	220	75,1	75,1	75,1
	Instituciones del Estado	49	16,7	16,7	91,8
	Instituciones sociales	24	8,2	8,2	100,0
	<i>Total</i>	<i>293</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	

Fuente: cálculos propios.

GRÁFICO 5

Frecuencia de creación de organizaciones sociales y civiles en el Cauca, 2007

(En porcentajes)



Fuente: elaboración propia.

que apenas un 10% de ellas tienen más de seis años de constituidas, lo que ofrece muy poco margen de madurez para establecer vínculos que redunden en mayores niveles de producción de bienes colectivos. Es más, los pocos proyectos que se realizan como extensión de redes de colaboración operan bajo la tutela del Estado, aspecto que obstruye las posibilidades de ampliar la esfera pública. Como es natural, debido a los niveles de desarrollo del departamento, la mayoría de las organizaciones persiguen objetivos ligados a actividades primarias (agricultura, ganadería, minería) y algunas otras, objetivos como la promoción de la vivienda y el reconocimiento étnico, pese a que la mayoría de los proyectos se articulan con la actividad estatal (véase el cuadro 9).

Solo un 22,5% de las organizaciones participan en los mecanismos de rendición de cuentas (*accountability*). Es más, alrededor del 6,5% han utilizado alguna vez un mecanismo de participación popular como los previstos en la Constitución Política para defender alguna causa de interés público, aunque casi el 53% han recibido cursos o capacitaciones sobre la materia. Con todo, en el interior de la organización la mayoría (83,6%) manifiesta tener confianza en los miembros del grupo. Ello obedece tal vez a la fuerte homogeneidad de sus miembros, lo que confirma la naturaleza filial de estas entidades (véase el cuadro 10).

No obstante, lo que termina sorprendiendo es que al ser interrogados sobre la disponibilidad para desprenderse del 50% del patrimonio de la entidad a fin de asumir un gran proyecto de interés público, los

informantes manifestaron en su mayoría (62,1%) estar de acuerdo (véase el cuadro 11).

Esta pregunta encarnó un interés muy particular, cual era la posibilidad de indagar acerca de la generación de confianza más allá de los propios miembros de la organización. Si se considera la precariedad de los recursos disponibles, evidente en asuntos como la no disposición de una sede o posesión de una página web (alrededor del 80% de las organizaciones), sorprende que el grueso de los estamentos estuvieran dispuestos a realizar este acto de altruismo, porque según una sana lógica económica se puede anotar que, conforme aumentan los ingresos y el patrimonio, se eleva la utilidad marginal por el bien público, desplegando mayor generosidad hacia lo colectivo, de modo que disponer de menores recursos produciría el efecto contrario. Basados en este resultado, se puede decir que no todo es negativo puesto que existen ex profeso verdaderas intenciones de generar “republicanismo cívico” a la Putnam; solo que las reglas de juego informal determinan exógenamente resultados no deseables desde el punto de vista de la coordinación social. Justamente esto es lo que se percibe en los obstáculos para su desempeño a que aluden las organizaciones (véase el gráfico 6).

En efecto, como se observa en el gráfico 6, después de los bajos ingresos (29%), son las costumbres políticas y los magros niveles de participación los que truncan las posibilidades de alcanzar un mayor nivel de capital social positivo, que se traduciría en confianza y bienestar económico en el departamento del Cauca.

CUADRO 9

El Cauca: participación en los mecanismos de rendición de cuentas

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No	227,0	77,5	77,5	77,5
	Sí	66,0	22,5	22,5	100,0
	<i>Total</i>	<i>293</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	

Fuente: cálculos propios.

CUADRO 10

El Cauca: confianza entre los socios

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No	48,0	16,4	16,4	16,4
	Sí	245,0	83,6	83,6	100,0
	<i>Total</i>	<i>293,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	

Fuente: cálculos propios.

CUADRO 11

El Cauca: disponibilidad para entregar el 50% del patrimonio

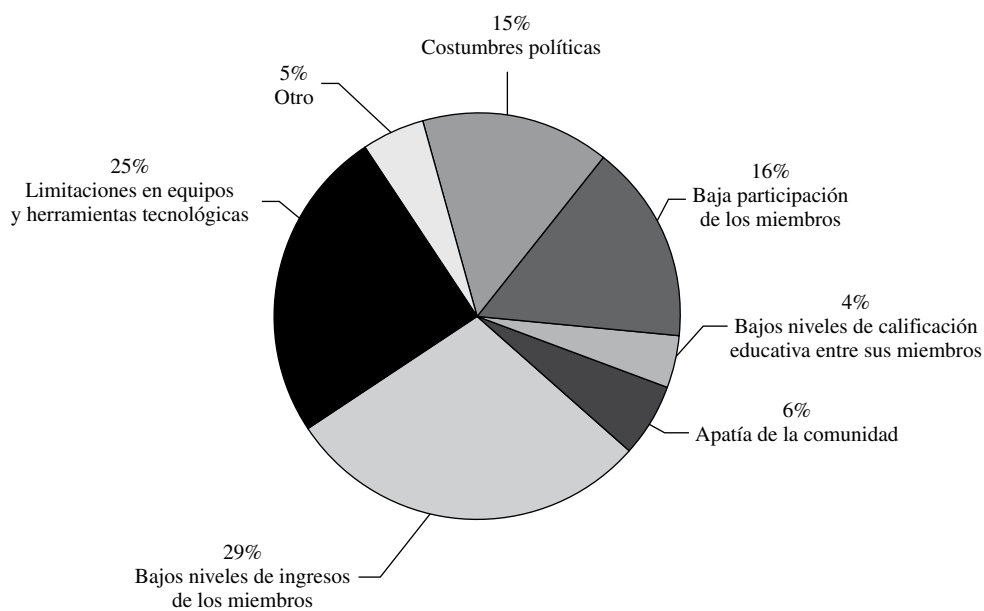
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No	111,0	37,9	37,9	37,9
	Sí	182,0	62,1	62,1	100,0
<i>Total</i>		<i>293,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	

Fuente: cálculos propios.

GRÁFICO 6

Mayor obstáculo de la organización

(En porcentajes)



Fuente: cálculos propios.

VII

Conclusiones

El capital social se convierte en el eslabón perdido capaz de cambiar la noción de desarrollo y promover nuevas formas de representación que generen círculos de productividad en entornos socioculturales definidos. Su dinámica hace posible producir fuertes lazos asociativos que pueden alcanzar la sustentabilidad del crecimiento. No obstante, su aplicación investigativa entraña cierta complejidad que se advierte en la tensión entre el plano individual y el colectivo del comportamiento humano.

Para el caso caucano, la diversidad de las dinámicas de organización o el aprendizaje social han permitido observar agrupaciones que actúan en competencia o en combinación con otras tradicionales (partidos o grupos de interés), formando movimientos sociales que si bien detentan cuadros organizativos fuertes mantienen iguales prácticas de afirmación de demandas grupales que no representan necesariamente capital social, en sentido lato.

En este orden de ideas, es importante resaltar que la relación entre acciones colectivas y capital social está permeada exógenamente por factores geográficos y por la endogeneidad inherente de los factores institucionales (históricos). Ello redundará en la divergencia del desempeño económico. Tampoco existe evidencia suficiente sobre la ligazón expresa entre el desarrollo de la movilización social y la generación de esta clase de capital, dado que la primera obedece a intereses de reconocimiento étnico y demandas al Estado, en tanto que las organizaciones de la sociedad civil aparecen más bien como apéndices de este último, sin ser necesariamente sus oponentes, lo que las liga a las prácticas clientelistas legadas por las instituciones coloniales. En lo que sí coinciden ambos fenómenos es en la escasa duración en el tiempo y en la poca capacidad para generar redes asociativas que vayan más allá de los vínculos filiales.

Mientras tanto, las comunidades indígenas —que se presentan como el grupo más fuerte en cuanto a movilizaciones y su práctica contestataria— han generado mecanismos de reforzamiento de los contratos basados en el castigo y la reputación, plenamente funcionales dentro de los grupos étnicos, pero totalmente disfuncionales para fortalecer la dinámica de intercambio. No desconocemos que las relaciones sociales inmersas en estos grupos tengan algo de capital social; sin embargo, concluimos que ese tipo de relaciones sociales no potencian el desarrollo —no al menos sin la intervención de actores extralocales—, las mejores prácticas de política y un mejor papel de la administración pública.

Por el contrario, en el departamento del Cauca la organización social solo es contundente en torno de la construcción de identidad, pero no respecto del logro de la provisión de bienes públicos locales y el mejoramiento de las condiciones de vida de la región, objetivos clave sin lugar a dudas del capital social. Aunque el derecho a la autodeterminación de la sociedad civil requiere del cumplimiento de los principios liberales del Estado de derecho, estrechamente relacionados con la diversidad cultural articulada con el concepto de ciudadanía, ello no puede ser a costa del desmejoramiento de la calidad de vida de su población, pero sí para desterrar los discursos hegemónicos que promueven el atraso.

Finalmente, la dicotomía entre el determinismo estructural derivado de la dependencia de la historia (*path dependence*) y la capacidad de transformación y cambio de las políticas públicas es una implicancia clave que deseamos dejar presente en el análisis del lector. La discusión originada en la exogeneidad o endogeneidad de los determinantes del progreso económico hace relevante la participación del Estado en la organización socioeconómica de largo plazo, así como de otros actores políticos y sociales relevantes en el mundo actual, sin descuidar la relativa independencia de la sociedad civil.

Bibliografía

- Agredo, J. y L. Flórez (2005), "Hacia una caracterización de las acciones colectivas en el Departamento del Cauca (1990-2002)", Tesis de grado, Popayán, Universidad del Cauca.
- Alonso, J.A. (2007), "Desigualdad, instituciones y progreso: un debate entre la historia y el presente", *Revista de la CEPAL*, N° 93 (LC/G.2347-P), Santiago de Chile, diciembre.
- Almond, G. y S. Verba (1992), "La cultura política", *Diez textos básicos de ciencia política*, Albert Batlle (coord.), Barcelona, Ariel.
- Blomstrom, M. y B. Hettne (1990), *La teoría del desarrollo en transición*, México, D.F., Fondo de Cultura Económica.
- Bonet, J. y A. Meisel (1999), "La convergencia regional en Colombia: una visión de largo plazo, 1926-1995", *Coyuntura económica*, vol. 24, N° 31, marzo.
- Bourdieu, P. (2001), "El capital social: apuntes provisionales", *Zona abierta*, N° 94-95, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, enero.
- (1980), "Le capital social, notes provisoires", *Actes de la recherche en sciences sociales*, N° 31, París, Centre de sociologie européenne, enero.
- Buchanan, J.M. y G. Tullock (1993), *El cálculo del consenso: fundamentos lógicos de la democracia constitucional*, Madrid, Planeta-De Agostini.
- Caviedes, M. (2001), "Antropología y movimiento indígena", Tesis de grado, Bogotá, D.C., Universidad Nacional de Colombia.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2007), *Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe*, (LC/G.2335/Rev.1), Santiago de Chile, enero.
- Coleman, J. (2001), "Capital social y creación de capital humano", *Zona abierta*, N° 94-95, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, enero.
- (1990), "Social capital", *Foundations of Social Theory*, Cambridge, Massachusetts, Belknap Press.
- Cuéllar, M.M. (2000a), *Colombia: un proyecto inconcluso. Valores, instituciones y capital social*, vol. 1, Bogotá, D.C., Universidad Externado de Colombia.
- (2000b), ¿Es perverso el capital social en Colombia?, *Economía colombiana y coyuntura política*, N° 279, Bogotá, D.C., Contraloría General de la República, agosto.
- DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) (2005), *Estadísticas. Censo Nacional de Población*, Bogotá, D.C.
- Dasgupta, P. (2004), *The Economics of Social Capital*, Universidad de Sidney.
- De Soto, H. (2001), *El misterio del capital*, México, D.F., Editorial Diana.
- DNP (Departamento Nacional de Planeación) (2007), "Acciones y estrategias para impulsar el desarrollo sostenible del Departamento del Cauca", *Documento Conpes*, N° 3461, Bogotá, D.C., Consejo Nacional de Política Económica y Social, 12 de marzo.
- (1995), "Promoción de la participación de la sociedad civil: del derecho a participar a la participación efectiva", *Documento Conpes*, N° 2779, Santafé de Bogotá.
- Durlauf, S.N. y M. Fafchamps (2005), "Social capital", *Handbook of Economic Growth*, vol. 1, parte 2, Amsterdam, Elsevier.
- Durston, J. y E. López (2006), "Capital social y gestión participativa en la Cuenca de Pátzcuaro", *Revista de la CEPAL*, N° 90 (LC/G.2323-P), Santiago de Chile, diciembre.
- Fukuyama, F. (2004), *La construcción del Estado. Hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI*, Barcelona, Ediciones B.
- Galvis, F. (2005), *Manual de ciencia política*, Bogotá, D.C., Editorial Temis.
- Granovetter, M.S. (1985), "Economic action, social structure and embeddedness", *American Journal of Sociology*, vol. 91, N° 3, Chicago, University of Chicago Press.
- Hausmann, R., D. Rodrik y A. Velasco (2006), "Para acertarle al diagnóstico", *Finanzas y desarrollo*, vol. 43, N° 1, Washington, D.C., Fondo Monetario Internacional, marzo.
- Hernández, M., D. Ochoa y E. Novoa (2001), "Del capital social a la construcción de lo público", *Revista Trans*, N° 1, Bogotá, D.C., Universidad Nacional de Colombia.
- Inglehart, R. (1977), *The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics*, Princeton, Princeton University Press.
- Jaramillo, D. (2007), "Movimientos sociales y resistencia comunitaria en El Cauca", *Documento de trabajo*, Popayán, Departamento de Historia, Universidad del Cauca.
- (2003), "Un gobierno alternativo de los movimientos sociales en el Cauca, Colombia", *Movimientos sociales, nuevos actores y participación política en Colombia*, México, D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, junio.
- Mariñez Navarro, F. (2001), *Ciencia política: nuevos contextos, nuevos desafíos*, México, D.F., Noriega Editores.
- Molenaers, N. (2006), "La vida asociativa en dos pueblos nicaragüenses", *Revista de la CEPAL*, N° 90 (LC/G.2323-P), Santiago de Chile, diciembre.
- Montoya, A. (2006), "Campesinos e indígenas. Asimilación, encuentros y diferencias de dos conceptos de ciencias sociales", *Textos y conferencias*, N° 12, Popayán, Departamento de Ciencia Política, Universidad del Cauca.
- Naritomi, J., R. Soares y J. Assunção (2007), "Rent seeking and the unveiling of 'De Facto' institutions: development and colonial heritage within Brazil", *NBER Working Papers*, N° 13545, Cambridge, Massachusetts, National Bureau of Economic Research.
- North, D. (1990), *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Olson, M. (1982), "The logic of collective action", *Public Goods and Theory Groups*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University.
- Ostrom, E. (1990), *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Nueva York, Cambridge University Press.
- Putnam, R.D. (2000), *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, Nueva York, Simon & Schuster.
- Putnam, R.D., L. Leonardi y R. Nanetti (1993), *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton, Princeton University Press.
- Ray, D. (1998), *Economía del desarrollo*, Barcelona, Antony Bosch Editor.
- Rey, S.J. y B.D. Montouri (1998), "U.S. regional income convergence: a spatial econometric perspective", *Documento de trabajo*, San Diego, San Diego State University.
- Ritzer, G. (1993), *Teoría sociológica contemporánea*, Buenos Aires, McGraw Hill Interamericana.
- Ruiz, V. (2004), *Organizaciones comunitarias y gestión asociada. Una estrategia para el desarrollo de ciudadanía emancipada*, Buenos Aires, Paidós.
- Sudarsky, J. (1999), "El capital social en Colombia. La medición nacional con el BARCAS", *Separata*, N° 5 de 5, Documento 126, Bogotá, D.C., Departamento Nacional de Planeación.
- Tocancipá, J. (2004), "Movimientos sociales, cultura política y poder regional. El caso del movimiento del macizo colombiano (MMC)", *Journal of Latin American Anthropology* [en línea] <http://www.essex.ac.uk/jlaca/>
- Touraine, A. (1978), *Las sociedades dependientes: ensayos sobre América Latina*, México, D.F., Siglo Veintiuno Editores.
- Valles, J. (2000), *Ciencia política: una introducción*, Barcelona, Ariel.
- Villar, R. (2003), "De la participación a la incidencia de las osc en las políticas públicas", *Organizaciones de la sociedad civil e incidencia en políticas públicas*, Inés González y Rodrigo Villar (comps.), Buenos Aires, Zorzal.